

C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En los autos RIT 258-2022 del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el cinco de agosto último se dictó sentencia definitiva respecto de tres imputados en relación a diversos delitos de estafa. Dicha sentencia fue rectificada, en cuanto a los abonos que favorecen a los acusados, el día 6 de agosto de este año.

En lo que interesa, la sentencia condenó a Juan Pablo Catrín Cariqueo como autor de dos delitos consumados de estafa en el otorgamiento de crédito a instituciones financieras, cometidos los días 11 y 13 de febrero de 2019 en las comunas de Quinta Normal y Santiago, respectivamente, a dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Se sustituyó la pena privativa de libertad impuesta a Catrín Cariqueo por tres años reclusión parcial con monitoreo telemático.

En contra de la referida sentencia, la defensoría penal pública, representada por el abogado Pablo Sanzana Fernández dedujo recurso de nulidad el que fundó en el motivo absoluto de nulidad del artículo 373 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y 297 todos del Código Procesal Penal.

El recurso fue declarado admisible y se procedió a su conocimiento el día veinticuatro de septiembre último, fijándose como fecha para la lectura de la sentencia la del día de hoy.

Oídos los intervinientes y considerando:

Primero: Que como se adelantó, la defensa sostuvo que el fallo dictado incurrió en el motivo absoluto de nulidad del artículo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FFYHXQZXVJH

373 letra e) en relación al artículo 342 letra c) y 297 todos del Código Procesal Penal.

Explica que su representado, respecto de los delitos por los cuales fue condenado habría participado, según la acusación, previo concierto, facilitando boletas de pago de pensiones de DIPRECA falsas, ofreciéndose para la gestión de créditos ante DETACOOOP a cambio de una parte del dinero obtenido, conociendo por tanto el engaño que los otros dos acusados presentaron a la víctima.

Sostiene que la sentencia incurre en una vulneración al principio de no contradicción y de razón suficiente, ya que el razonamiento arriba a una conclusión contradictoria, sobre la base de las premisas establecidas. Afirma que se omitió un razonamiento lógico, que dio origen a un fallo sin la debida motivación.

Alude enseguida a todas las normas y a la doctrina que establece la obligación de fundamentar las sentencias, para luego decir que el fallo vulnera el principio de corroboración. Explica que el tribunal, sin existir justificación material suficiente toma como antecedente de participación de su representado el solo reconocimiento que realizaron los coimputados Cristián Elgueta Peralta y Álvaro Valentino Jara quienes tenían un fin absolutamente ganancial, lo que se ve corroborado cuando el tribunal les reconoce la minorante de colaboración substancial en el considerando 13° de la sentencia. Dice además que el fallo no es claro pues no determina de manera inequívoca la participación de su representado, en circunstancias que ningún testigo pudo reconocer en audiencia a Juan Pablo Catrin, de manera que no hay razón suficiente de condena existiendo una contradicción entre la aparente certeza plena de los hechos que se bastan a sí



mismos para dar por acreditado el delito y por otra parte, la falta de elementos que den sustento de certeza.

Luego reproduce la parte pertinente de las declaraciones de los testigos que lo mencionan y que concurrieron al juicio oral sin que ninguno haya podido reconocerlo. Añade que por su parte ninguno de los testigos que lo reconocieron fotográficamente durante la investigación fue presentado a juicio y sostiene que para el tribunal no fue trascendente que su representado entregara a los funcionarios policiales en forma voluntaria sus dispositivos electrónicos con sus claves, sin que el funcionario pudiera señalar algún resultado útil de esta diligencia. Argumenta que no se acreditó por ningún medio de prueba que se haya entregado dinero a su representado.

Así dice que lo único que se tiene es que una persona llamada Juan Pablo Catrín participó en los hechos, pero no se acreditó que su representado sea esa persona realmente, salvo la declaración de los dos coimputados que si bien lo incriminan, tienen un fin ganancial.

Añade que el testigo Víctor Ossandón Ferrada que corroboraría, según la sentencia, la forma de operar y participar de Juan Pablo Catrín, no tiene sustento en su testimonio y entra en contradicción con lo señalado en su declaración, que según la sentencia señala “Aunque no pudo proporcionar información detallada sobre Juan Pablo Catrín, la persona que supuestamente organizó el crédito, y mostró confusión respecto a las cantidades de dinero entregadas a Catrín”.

Concluye que se vulnera el principio de corroboración porque de acuerdo a los hechos establecidos en la sentencia no se demostró que la persona que decía llamarse Juan Pablo Catrín, según los testigos, corresponda a su representado, porque



en el juicio no existió material probatorio y evidencia física exigidos por la normativa mencionada para acreditar la participación.

Segundo: Que al explicar cómo la causal de nulidad influyó en lo dispositivo de la sentencia, dice que al verificarse un incumplimiento al deber de motivación y fundamentación, se condenó a su representado en circunstancias que debió ser absuelto.

Por lo anterior solicita se anule parcialmente el juicio y la sentencia solo en lo que dice relación a los hechos cometidos los días 11 y 13 de febrero de 2019 en las comunas de Quinta Normal y Santiago respectivamente, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento, remitiendo los autos ante tribunal no inhabilitado para la realización de un nuevo juicio oral.

Tercero: Que el artículo 374 del Código Procesal Penal establece los motivos absolutos de nulidad; y dispone: El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e). Por su parte el artículo 342, que establece el contenido de la sentencia dispone que la sentencia definitiva contendrá: literal c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297. Esta última disposición, en lo que interesa al recurso, dispone en su inciso primero, que “Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”.



En lo particular, el recurrente acusa una vulneración al principio de razón suficiente que, como se ha dicho en numerosas ocasiones, consiste en que ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Además, considera que la sentencia no es motivada ni aparece debidamente corroborada para atribuir participación a su representado en los delitos por los que fue condenado, incurriendo en contradicciones.

En consecuencia y en relación al fallo, la decisión de condena debe tener una razón suficiente que la justifique para ser así y no de otra forma, lo que redundaría en exigencias de corroboración y no contradicción. Desde esta óptica entonces es que ha de revisarse el fallo para determinar si la denuncia que hace la defensa constituye el motivo absoluto de nulidad que permite invalidarla.

Cuarto: Que, como se ve, el recurso de nulidad considera que los argumentos entregados por el tribunal para condenar a su representado no son suficientes, ni aparecen debidamente corroborados.

Pues bien, la sentencia en el motivo décimo, indicó que los imputados Elgueta y Jara se presentaron en la casa matriz y en una sucursal de DETACOOPT Ltda, quienes adjuntaron tres boletas de pensión de DIPRECA falsas, haciendo creer a la víctima que eran pensionados de dicha entidad, obteniendo cada uno un crédito de \$15.000.000 y, que en ambos casos, Juan Pablo Catrín Cariqueo participó con ellos, previo concierto, facilitándoles las boletas de pago de pensiones falsas, al ofrecerse para la gestión de los créditos a cambio de una parte del dinero obtenido, conociendo el engaño de Elgueta y Jara.



Para la participación el tribunal consideró que si bien Juan Pablo Catrín Cariquero negó tenerla, la prueba permitió demostrar que tenía conocimiento del fraude. Se añadió su experiencia en el sector financiero y la documentación encontrada en su domicilio, lo cual apunta en esa dirección. Se sumó también la mención expresa de su intervención que hicieron los coimputados lo cual reforzó su rol en la coordinación de múltiples solicitudes de crédito en un mismo y corto período y la facilitación de documentación falsa, según los testimonios presentados, lo que a juicio del tribunal, demuestra una voluntad de participar en el esquema.

Quinto: Que en la primera parte la sentencia reproduce las declaraciones de los coimputados, como también la de los testigos, todos mencionan como partícipe a Juan Pablo Catrín, pero el fallo no se queda sólo allí, pues para demostrar que el acusado es precisamente el mencionado Juan Pablo Catrín que mencionan los testigos, considera como elemento de corroboración el reconocimiento que de él hicieron los coimputados y la circunstancia de hallarse en su domicilio documentación precisa de DETACOOOP y DIPRECA, cuestión que aunada a la declaración del funcionario policial que sostuvo que otros testigos –que si bien no declararon en el juicio- lo reconocieron fotográficamente durante la investigación como la persona que participaba en la obtención fraudulenta de estos créditos condujo al tribunal a establecer su participación culpable en los delitos por los cuales fue condenado.

De esta forma, el fallo cumple con el deber de fundamentación y suficiencia para condenar al acusado, pues no se trata solo –como lo ve la defensa- de una inculpación gananciosa de los coacusados sino que existe el restante material probatorio que da sustento a la condena a la que arribó el tribunal,



descartando así una falta de corroboración o contradicción en la imputación.

Sexto: Que como tantas veces se ha dicho, en un recurso de nulidad, el examen que hace esta Corte sólo consiste en verificar la existencia del vicio denunciado –nada más– sin que corresponda revisar nuevamente la prueba como si se tratara de un juicio de mérito pues, lo que se revisa es la argumentación que hizo el tribunal para condenar, conforme a la causal de nulidad entablada.

Por ello, no se trata de compartir o no la decisión sino tan solo revisar si ésta cumple con los límites y exigencias de la sana crítica y ello, conforme se verificó, fue cabalmente satisfecho.

Séptimo: Que por todo lo razonado, el presente recurso de nulidad, no puede tener éxito y debe ser desechado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 385 del Código Procesal Penal, **se rechaza, el recurso de nulidad parcial** deducido por la defensoría penal pública en representación del sentenciado Juan Pablo Catrín Cariqueo en contra de la sentencia de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, complementada con la resolución del día seis de agosto de este año en los autos RIT 258-2022 del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Redactó la ministra Mireya López Miranda.

Regístrese y comuníquese.

N°Penal-4858-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FFYHXQZXVJH



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FFYHXQZXVJH

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia López M., Maria Paula Merino V. y Abogado Integrante Renee Rivero H. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FFYHXQZXVJH